

LA AMENAZA DE LA “FUJIMORIZACIÓN” GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA EN CONDICIONES ADVERSAS: PERÚ Y LOS PAÍSES ANDINOS

Fernando Rospigliosi

1. Introducción

Al iniciarse la década de 1990, un optimismo exultante se extendía en toda América Latina. La democracia había triunfado prácticamente en todas partes y los gobiernos autoritarios habían ido cayendo uno a uno, incluyendo al más antiguo, el de Alfredo Stroessner en Paraguay, y el de los sandinistas en Nicaragua. Con la sola excepción de Cuba, cuyo régimen se consumía ya sin esperanzas, en todo el resto del continente la democracia parecía avanzar sin trabas desde principios de los años 80, cuando los autoritarismos militares empezaron a retirarse por diversas causas.

El ambiente internacional era excepcionalmente favorable. El derrumbe del comunismo en todo el mundo y la desintegración de la Unión Soviética hicieron desaparecer la única alternativa coherente a la democracia, que durante décadas había entusiasmado a muchos partidos y movimientos en América Latina. Este mismo suceso acabó con la “guerra fría” e hizo que los conflictos -reales o potenciales- que surgieran en el continente no fueran asumidos como parte de la confrontación Este-Oeste por los Estados Unidos, hecho que los había llevado a priorizar en décadas pasadas, por encima de todo, el combate a los comunistas, aunque eso implicara el respaldo a dictaduras de derecha. Aunque es verdad que la política de los EE.UU. hacia América Latina, por diversas consideraciones internas y externas, también había virado hacia un mayor respaldo a la democracia antes del

derrumbe del bloque soviético, éste hecho reforzó fuertemente la política de los EE.UU. en el sentido de apoyar y promover las democracias, oponiéndose a cualquier intento de intervención militar que las derribara.

Producto de estos dos hechos favorables -extensión de la democracia desde principios de los 80 y contexto internacional propicio- se produjo ese optimismo desbordante. Sin embargo, como se ha demostrado después, era exagerado. La pregunta es si las democracias estaban consolidándose o sólo sobreviviendo.

Algunas de ellas, como ha sostenido O'Donnell, solamente han estado durando sin consolidarse, pudiendo ser sólo un interludio antes de una abierta regresión autoritaria. La construcción de instituciones democráticas es el punto crucial para la "segunda transición", de un gobierno electo a un régimen democrático, es decir, a una democracia institucionalizada y consolidada. (1992:2). Y en muchos lugares ese paso no se ha dado.

En el caso peruano, como se demostró en 1992, la democracia sólo había sobrevivido, pues se derrumbó fácilmente ante los embates de los militares aliados con un presidente autoritario.

En el resto de los países andinos tampoco la democracia parece haberse consolidado, aunque hay notables diferencias. El caso de Bolivia, considerado hasta mediados de los 80 probablemente como el país políticamente más inestable de América Latina, es el más sorprendente, pues a partir de esa fecha ha adquirido una envidiable estabilidad, que ha permitido hasta el momento la instalación sucesiva de tres regímenes electos y la finalización del mandato completo de dos de ellos. (Mayorga R., 1991). En el polo opuesto -exceptuando al Perú- está Venezuela, que hasta 1989 era considerada una democracia relativamente estable y no amenazada por peligros graves, y que a partir de esa fecha ha sufrido una serie de convulsiones, incluyendo revueltas populares, varios intentos de golpe de Estado y la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez, que han hecho dudar de sus posibilidades de sobrevivencia.

En Ecuador y Colombia, a pesar de algunas mejoras importantes, difícilmente puede decirse que se haya avanzado seriamente en la consolidación democrática, entendiéndola a la manera de O'Donnell, como la construcción de un fuerte set de instituciones democráticas. En Colombia, el intento de reforma con una nueva Constitución, la renovación de los partidos, la apertura del sistema político excluyente y los intentos de pacificación, parece haber tenido algunos éxitos parciales, aunque dista mucho de haberse producido un cambio sustancial. (Sánchez, 1991:113) En Ecuador tampoco parece haberse avanzado en la construcción de instituciones

democráticas, subsistiendo un sistema basado en la fuerza de los caudillos y en la predominancia absoluta de la confrontación sobre la cooperación. (Rivera, 1992:324, López Núñez, 1992:229). Está por verse si el sistema político ecuatoriano resiste las tensiones a que lo está sometiendo la política de ajuste económico.

En cuanto a las FF.AA., que son las que en última instancia terminan decidiendo si la democracia es derrocada o no, la situación de los países andinos es también disímil. En Perú y Venezuela han adquirido nuevamente papeles protagónicos, más en el primero que el segundo. En Bolivia su rol político prácticamente se ha desvanecido mientras que en Ecuador y Colombia parece que no ha habido variaciones sustanciales.

2. La “fujimorización”

Alberto Fujimori, se hizo conocido internacionalmente desde que le ganó la elección a Mario Vargas Llosa a mediados de 1990. Era el ejemplo más acabado del *outsider*, que surgiendo de la nada alcanzaba el más alto cargo luego de una meteórica carrera. Cuando aparecía en algún lugar del mundo alguien parecido se le llamaba “el Fujimori ...”. Desde el 5 de abril de 1992, el esquema utilizado en el Perú para derribar la democracia se popularizó en América Latina y el mundo como “fujimorización”. Su característica esencial es que, a diferencia de los tradicionales golpes militares que acaban con los poderes civiles e instalan a los uniformados en los principales cargos públicos, esta vez un presidente civil, elegido en comicios limpios, encabeza el golpe que clausura el Parlamento y otras instituciones de la democracia, destruye o restringe a su mínima expresión a la oposición política, concentrando un poder que actúa libre de contrapesos y fiscalización, pero que por su origen como por su apariencia pretende ser una democracia.

Uno de los hechos más llamativos es que, inmediatamente después del golpe en el Perú, varios presidentes y personalidades latinoamericanas empezaron a usar el término “fujimorización” ya sea para asegurar que en su país no ocurriría nada semejante, como hizo el presidente brasileño Itamar Franco; o para amenazar a sus propios parlamentos y a la oposición con hacer algo similar, como advirtió el presidente boliviano Jaime Paz Zamora. Por cierto, quien fue más lejos es el presidente guatemalteco Jorge Serrano, aunque su entusiasmo superó largamente su cálculo, pues su intento fracasó al cabo de pocos días. Sin considerar experiencias más lejanas, como la de Boris Yeltsin en Rusia, que aunque no tengan relación directa con el caso peruano, refuerzan la idea -atractiva para ciertos gobernantes- de un presidente autoritario que, apoyado por los militares, disuelve el parlamento y se hace de poderes dictatoriales.

Las sonoras repercusiones de la "fujimorización" peruana se deberían a que, en diverso grado, muchos países de América Latina atraviesan por similares problemas. Es decir, tienen regímenes políticos democráticos relativamente recientes, poco institucionalizados, sociedades civiles débiles y afrontan graves crisis económicas y sociales. Esta poco feliz combinación en otras épocas se hubiera saldado con el resultado típico, un golpe militar. Pero por diversas razones -entre las que están la presión internacional de los países industrializados a favor de la democracia, el derrumbe del comunismo, el desprestigio de los militares-, la salida en el caso peruano ha sido la descrita y no el asalto directo de los uniformados al poder. Y esa parece ser también la alternativa que algunos perciben como deseable en otros países, un autoritarismo con fachada civil y democrática.

Por cierto, no basta desearlo para tenerlo, como enseña la experiencia de Guatemala. Pero el caso peruano demuestra también los límites de los ideales democráticos que animan a la comunidad internacional. Es decir, si el régimen dictatorial se estabiliza y si no colisiona con los intereses de las grandes potencias, estas serán tolerantes y permisivas, o como gustan decir sus representantes diplomáticos, *realistas*.

La pregunta es si Fujimori es un producto excepcional, y único surgido de la terrible situación peruana que combinaba hiperinflación, con caída vertical de la producción y los niveles de vida, junto a un terrorismo fanático y sangriento, a lo cual había que sumarle una creciente presencia del narcotráfico. O si, por el contrario, es la avanzada de un nuevo tipo de dictadura que podría extenderse a otros países de América Latina, que aunque no sufran la misma acumulación de problemas, atraviesen una crisis profunda.

Ciertamente la situación de Perú era extrema. Bolivia tuvo hiperinflación y narcotráfico, pero no terrorismo. Colombia tiene narcotráfico y guerrillas, pero su economía no cesa de crecer y no tiene inflación. Ecuador recién empieza a vislumbrar una moderada inflación y sus movimientos guerrilleros han sido raquíticos. Venezuela ha empezado a conocer la inflación en los últimos años, pero su economía ha crecido y no tiene guerrilla.

A pesar de lo cual, la lentitud o el fracaso en construir instituciones democráticas sólidas, parece hacer a las democracias andinas vulnerables a los embates de situaciones difíciles, básicamente ajustes económicos bruscos y prolongados, y violencia política organizada. Por cierto, esos fenómenos afectan de diferente manera a cada país debido a los diversos grados de desarrollo alcanzado. Pareciera que un menor nivel de modernización, hace hasta cierto punto que los países sean

más resistentes a las crisis, como indicarían los casos de Bolivia y Ecuador. Asimismo, economías más robustas, como la colombiana -que además contó durante décadas con partidos políticos fuertes- tienen cimientos más resistentes.

En suma, la democracia no parece haberse consolidado en los países andinos. En algunos, como Perú y Venezuela, hay considerables retrocesos, y es notorio el avance en Bolivia, mientras Ecuador y Colombia parecerían estar caminando hacia transformaciones -económica el primero y política el segundo- cuyos resultados todavía no se vislumbran claramente.

Las posibilidades de la extensión de la “fujimorización” no deben ser despreciadas ante la aparición de una conjunción de problemas graves que pongan en peligro la estabilidad de los países. Esa alternativa es vista con simpatía por sectores influyentes, tanto en América Latina como en los países industrializados. Como dice la revista *Time*, que designó a Alberto Fujimori el “Hombre del Año” en 1993 para Latinoamérica, el Perú se había convertido en ingobernable y ahora se ha estabilizado, concluyendo que Fujimori no es un capítulo diferente sino un nuevo libro en esta historia. (“A Rewrite Man for Peruvian History”, *Time*, 3.1.94)

En Brasil, el ex-ministro de Justicia, Mauricio Correa, reveló que “el presidente Itamar Franco rechazó en 1993 una oferta por parte de un grupo de civiles y militares, que ofrecían apoyo al mandatario para cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial”. En octubre y noviembre de 1993, según Correa, Franco fue sondeado por sectores que proponían medidas de fuerza. “La ‘fujimorización’ de Brasil solamente no ocurrió porque el presidente y los ministros militares se opusieron”, concluyó el ministro. (UPI, 6.1.94, *El Comercio*)

3. Crisis y gobernabilidad

El 1 de octubre de 1993, Alberto Fujimori pronunció un discurso, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas justificando el golpe de Estado y el régimen que surgió de él. Fujimori sostuvo que en Perú existía “una aparente democracia”, una “democracia tradicional que no había solucionado ninguno de los graves problemas del Perú (y que) no ha sido sino la lucha entre minorías privilegiadas, élites y cúpulas, que se alternaban cada cierto tiempo en el poder, mientras la nación se sumía cada vez más en la miseria.” A continuación hizo un listado de los males que vivía el Perú, desde la hiperinflación al terrorismo, concluyendo que el país se hallaba en una situación de “ingobernabilidad”. Por tanto, concluyó, dada la situación excepcional en que se encontraba el Perú, había que tomar medidas drásticas, que han conducido a que “en nuestro país se esté

gestando una nueva y ejemplar democracia (...) El Perú está viviendo nuevamente la luz del día (...) y el fin de un nefasto ciclo”.

Las ideas contenidas en el discurso no son novedosas. En América Latina se han escuchado muchísimas veces durante las décadas de 1960 y 1970 y se creían ya extinguidas. Pero he aquí que reaparecen nuevamente, sólo que esta vez -signo de los tiempos- quien las pronuncia no viste el uniforme militar sino un atuendo civil.

El primer elemento que cabe destacar es que Fujimori se ubica en el campo de la democracia. El es portador de la democracia *nueva, real* y ha terminado con la democracia *aparente, tradicional*. Si bien estos conceptos son antiguos y han sido usados muchas veces para justificar dictaduras, no hay que perder de vista que la definición que hace Fujimori de la democracia política coincide con la percepción de la mayoría de peruanos: “la lucha entre minorías privilegiadas, élites y cúpulas, que se alternaban cada cierto tiempo en el poder”.

El segundo elemento, es el de la presunta excepcionalidad del momento, en que el país estaba amenazado por la desintegración y era ingobernable. Ante esa situación, justifica Fujimori, no cabía sino tomar medidas excepcionales: el golpe. Por último, la ilusión de estar fundando un nuevo orden y acabando con otro.

La percepción que existe de la democracia en otros países de la región parece coincidir con la que tienen los peruanos. Una reciente encuesta efectuada simultáneamente en varios países, indica que sólo en Bolivia los que están satisfechos con la democracia superan a los insatisfechos por 73% a 27%. En todos los otros países andinos, la proporción de insatisfechos es superior: Ecuador 77% a 21%, Venezuela 75% a 16%, Colombia 71% a 28% y Perú 56% a 36%.¹

Al analizar estas cifras no hay que olvidar que no son comparables entre países en el sentido que no reflejan una mejor o peor calidad del régimen político. Es decir, la democracia boliviana no es necesariamente mejor que la venezolana porque el 73% de los bolivianos están satisfechos y sólo un 16% de los venezolanos lo está. Pero sí se puede interpretar que el enorme porcentaje de bolivianos satisfechos está comparando lo que tienen ahora con el caos y la inestabilidad anteriores. Para Bolivia, la democracia de la última década ha significado estabilidad política y una

1 “Tercer Barómetro Electoral”, encuesta efectuada en 10 países latinoamericanos, y España y Portugal en setiembre de 1993. (Diario *La República*, 4.12.93). La pregunta es “¿Dígame si Ud. está muy satisfecho, moderadamente satisfecho, poco satisfecho o insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en nuestro país?”. Para efectos de los porcentajes señalados, he agrupado las dos primeras opciones y las dos últimas.

cierta mejoría económica. Para los venezolanos, la democracia se asocia con la crisis económica y política de los últimos años.

La desaprobación a la democracia tal como hoy día existe en muchos países, no significa necesariamente que los pueblos prefieran las dictaduras, pero sí es un indicativo de la fragilidad de los regímenes políticos, debilidad que puede ser aprovechada en circunstancias propicias por el autoritarismo de cualquier signo.

¿Cómo se produce la deslegitimación de la democracia hasta llegar al punto en que estamos? El examen del caso peruano nos puede dar algunas pistas.

4. Democracia: no basta sobrevivir

La democracia representativa (re)instalada en el Perú 1980 no respondió a las expectativas que cifraba en ella la ciudadanía. Cuando los militares iniciaron la transición, a mediados de 1977, el proceso de crecimiento económico se había detenido, el nivel de vida había empezado a deteriorarse, y las libertades eran crecientemente recortadas. Las clases populares, recientemente urbanizadas, cuyos niveles de educación habían aumentado constantemente en las dos décadas anteriores, empezaron a ver frustradas sus expectativas de progreso e integración en la sociedad, y se volvieron masivamente contra el gobierno. Los empresarios, las clases medias y los partidos políticos, desafectos desde el principio a los militares, redoblaron sus demandas para que aquellos volvieran a sus cuarteles. Se formó así, un espontáneo frente de clases antidictatorial. Los militares, conscientes que entre la población crecía un amplio anti-militarismo y, quizás más importante para ellos, que la politización y faccionalismo en las FF.AA. amenazaban su unidad institucional, decidieron abandonar el poder. (Mauceri, 1989).

Aquí interesa destacar dos cosas. Primero, que la adhesión a la democracia, tanto de las clases populares como de los estratos medios y altos era más bien utilitaria que valorativa. Es decir, la crisis económica, el descenso de los salarios, los ingresos y las utilidades, y -en general- la caída del nivel de vida, se asociaban a la dictadura militar. Todos pensaban que en democracia podrían defender mejor sus intereses y que la crisis sería superada. Esta adhesión utilitaria a la democracia, no es, por cierto, extraordinaria ni necesariamente negativa. Ocurre así en los procesos de transición, en países en lo que previamente no ha existido una democracia estable. El problema surge luego, cuando la democracia no satisface el mínimo de expectativas de la población y cuando no dura lo suficiente como para que empiecen a cambiar los valores y patrones de comportamiento de los ciudadanos.

Segundo, vinculado con lo anterior, el advenimiento de la democracia trajo aparejadas expectativas desmesuradas² de la población, sobre todo de las clases populares. Como esas expectativas no fueron satisfechas, el desencanto empezó a minar con el paso de los años el aprecio por la democracia, que se consideró ineficiente para resolver los dos grandes problemas del país, que se arrastraron a lo largo de toda la década: la crisis económica y el terrorismo.

La democracia, entendida como democracia política³, no implica necesariamente una mejora en el nivel de vida de la población, ni una distribución de la riqueza más equitativa, ni la larga lista de apellidos que, según los gustos, le agregan algunos teóricos o grupos políticos: democracia social, participativa, real, etc. Pero, sin duda, hay una relación entre los logros percibidos por la población y su adhesión o no a la democracia. Un régimen político democrático en un país como el Perú, difícilmente puede resistir una prolongada crisis económica, que empobrece ininterrumpidamente a la población y aumenta las desigualdades sociales. Sobre todo si a ello se le agrega un fenómeno como la subversión armada.

El resultado ha sido un desafecto a la democracia en amplios segmentos de la población, tanto entre los de "arriba" como los de "abajo". Las encuestas que periódicamente indican que la mayoría está a favor de un régimen democrático, deben ser leídas con cuidado y no se conducen con el apoyo al golpe del 5 de abril.

Un reciente estudio efectuado en barrios populares de Lima muestra que el 81% de los entrevistados está de acuerdo con un "gobierno no elegido por el pueblo pero que sea justo y mejore la situación". (Parodi y Twanama, 1993:81). En el mismo sentido, una amplia mayoría (71%) prefiere una "autoridad fuerte y justa" a una "amplia libertad política" (29%). En base a encuestas y entrevistas, una de las conclusiones de los autores, es que no hay mayor interés en los partidos pero sí en participar en la elección del gobernante. De lo cual deducen que estamos ante un anhelo de una democracia plebiscitaria que establezca un nexo directo entre la masa y el dirigente en el momento electoral. (Parodi y Twanama, 1993: 79).

Entre los empresarios, su masivo respaldo al golpe parece motivado por la convicción que sólo con "mano dura" se eliminará la amenaza terrorista, y por la

2 Las altas expectativas son características de la época actual, en América Latina y el Este de Europa. No ocurrió lo mismo en la ola democratizadora que siguió a la II Guerra Mundial (O'Donnell, 1992a:77)

3 Como dice Sartori "la democracia política como método o procedimiento, debe preceder a cualquier logro sustantivo que le pidamos a la democracia" aunque su importancia se encuentre en sus derivados no políticos (1988b:32).

creencia que en un esquema de liberalismo económico sus intereses serán favorecidos.

Gran parte de la responsabilidad de este creciente descrédito de la democracia la tienen los partidos políticos, que fracasaron en dar una respuesta adecuada a los desafíos que tuvo que enfrentar la sociedad peruana desde 1980.

Todo lo cual fue aprovechado por Fujimori y los militares para acabar con la democracia e instaurar un régimen autoritario.

5. La responsabilidad de los partidos políticos

El 5 de abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori disolvió el Parlamento e intervino el Poder Judicial, tomó por sorpresa a los partidos políticos. Pero lo más inesperado para éstos fue el alto respaldo que el golpe de Estado encontró en la población, en las élites empresariales y, por supuesto, en las fuerzas armadas que sustentaron la acción de Fujimori.

El descrédito de los partidos, del parlamento y del Poder Judicial son anteriores a Fujimori. Este ganó las elecciones de 1990 precisamente debido al profundo y extenso rechazo de la mayoría de la población a esas instituciones. (Rospigliosi 1992). Las élites políticas no percibieron el nivel de aislamiento en que se encontraban ni aprendieron las lecciones de 1990 -y de 1989, cuando un independiente ganó holgadamente el municipio de Lima-.

Los partidos políticos, precisamente porque no entendieron la profundidad de su aislamiento, no hicieron mucho por reconstituir sus vínculos con los electores, modificar sus comportamientos y democratizar sus estructuras. Además, la imagen pública que presentaron en la nueva situación creada, en la que por primera vez desde la restauración de la democracia en 1980, el gobierno no tenía mayoría en el parlamento, fue borrosa y contribuyó a aumentar su descrédito.

Los partidos, a pesar de no estar en el gobierno, tampoco estaban en la oposición. Con un parlamento fragmentado, ellos actuaron, en general, de manera responsable y moderada, por diversas razones. Una de ellas fue, por cierto, una dosis de sensatez, la comprensión que en la grave situación que vivía el país una oposición obstruccionista podía derrumbar la democracia. Otra fue el cálculo político: no había demasiado interés en desacreditar al partido de gobierno, porque éste -para efectos prácticos- no existía. Si Fujimori era exitoso, el “peligro” que su partido ganara las elecciones de 1995 era muy reducido, porque el éxito sería personal y las reglas de juego vigentes -que Fujimori no podía modificar precisamente porque no

tenía mayoría en el Parlamento- impedían al presidente postular a la reelección al término de su mandato.

Por último, en el caso de los partidos que integraron el disuelto Fredemo⁴ de Mario Vargas Llosa, el acuerdo básico con las políticas de liberalización de la economía era un freno a una oposición más radical. En lo que respecta al Apra, que apoyó a Fujimori en la segunda vuelta electoral, funcionó una alianza tácita durante el primer año del nuevo gobierno basada en el respaldo de la bancada oficialista a la exculpación de Alan García de las acusaciones de que era objeto. Además, su capacidad de maniobra era limitada, porque su desprestigio era particularmente intenso por el cercano y mal recuerdo del gobierno anterior. Y las izquierdas, que también apoyaron a Fujimori en las elecciones de junio de 1990, fueron en parte neutralizadas con la inicial inclusión de tres ministros de sus filas en el primer gabinete de Fujimori.

En este complejo -y confuso ante la población- juego, el Parlamento y los partidos políticos aparecían como oportunistas, irrelevantes, innecesarios⁵.

Es decir, teniendo en cuenta el desprestigio que arrastraban, los 20 meses de democracia durante el gobierno de Fujimori no sirvieron para que recuperaran credibilidad. Es en este contexto que las campañas de Fujimori y el Servicio de Inteligencia contra los políticos y las instituciones -en realidad contra la democracia representativa-, fueron exitosas.

En otra situación, el comportamiento de los partidos habría sido saludado como correcto y ejemplar. Si Fujimori hubiera accedido a dialogar y negociar, como muchas veces se lo plantearon representantes de diversos partidos, es posible que se alcanzaran acuerdos beneficiosos para todos. Pero Fujimori siempre se rehusó a cualquier tipo de negociación. Es decir, podía esperarse un desenlace favorable, si todos -o los principales- actores estaban dispuestos a jugar la partida dentro de las reglas de la democracia, pero no si dos de ellos -el presidente y las FF.AA.- querían cancelarla. Así, la conducta conciliadora de los partidos, que se mantuvieron dentro de un esquema de competencia-cooperación, terminó volviéndose contra ellos.

4 Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Movimiento Libertad y Solidaridad y Democracia.

5 La fluidez de situaciones de esta naturaleza de coaliciones cambiantes "crea también en la opinión pública una imagen de inestabilidad, de falta de principios, de dependencia de los partidos de grupos de intereses, de oportunismo y de lucha entre los líderes por el poder personal." (Linz 1987:123).

(Aunque probablemente un comportamiento de oposición radical tampoco hubiera servido para preservar la democracia).

El asunto no es sólo la negativa del presidente para seguir el camino normal en cualquier democracia, sino la incapacidad de todo el resto para forzarlo a aceptar las reglas del juego democrático. Un factor que dificultó eso fue, sin duda, la división de los partidos -incentivada astutamente por Fujimori- alrededor de temas como las acusaciones de corrupción contra Alan García y sus colaboradores, o sobre la política económica que enfrentaba liberales y populistas.

Pero el problema sustancial es, como se señaló más arriba, la debilidad de las instituciones que no pudieron resistir el embate autoritario de un presidente dispuesto a gobernar sin las “molestias” (O'Donnell 1992) del Parlamento y el Poder Judicial.

En descargo de los partidos, puede agregarse que la prolongada crisis económica iniciada a mediados de la década de 1970, acentuó los procesos de desintegración y fragmentación social. En este contexto, caracterizado por el aumento de la llamada informalidad, los partidos encuentran crecientes dificultades para agregar intereses de distintos actores y clases (Grompone 1991:98)

6. La popularidad de Fujimori

Uno de los fenómenos más sorprendentes para los observadores, es la popularidad que ha gozado Alberto Fujimori desde el inicio de su gobierno. Al parecer, la razón fundamental radicó, en un principio, en el éxito en detener la hiperinflación que asoló el país durante los últimos años del gobierno de Alan García. Pero antes del golpe del 5 de abril se notaba una tendencia al descenso. El golpe lo catapultó 30 puntos hacia arriba: las expectativas -o ilusiones- que con “mano dura” se resolverían los angustiantes problemas del país eran muy altas. Los meses siguientes fueron de una caída ininterrumpida hasta el 12 de setiembre de 1992, día en que fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que lo elevó nuevamente. Desde esa fecha a la actualidad, se percibe otra vez una tendencia a un descenso moderado. (Apoyo 1993c).

Esto se da en un contexto de creciente apatía ciudadana y alejamiento de la política, reflejados por hechos como la escasa participación en las elecciones del Congreso Constituyente en noviembre 1992 (28% de ausentismo) y el plebiscito de octubre 1993 (30% de ausentismo) o, como lo muestran las mismas encuestas, en un aumento del desinterés por la política: en abril de 1986, un 35% sostenía que la política no le interesaba, en febrero de 1993 la proporción había subido a 63%. (Apoyo 1993b).

Esta mezcla de desesperación ante una crisis tan prolongada con desinterés en la política, ocasionado -por lo menos en parte- por la falta de confianza en las posibilidades de cambio a través de la acción colectiva, haría que grandes segmentos de la población deleguen en los caudillos salvadores la potestad de gobernar autoritariamente. Pero en esa "democracia de salvadores" (odictadura de salvadores) "el camino de una gran popularidad hacia la abominación generalizada puede ser tan rápido como repentino" (O'Donnell 1992a:81).

En el caso de Alan García, que llegó a cimas inalcanzadas de popularidad para luego hundirse en el descrédito absoluto, existía la legitimidad democrática y la certeza que su gobierno terminaría el 28 de julio de 1990, lo cual abría un horizonte de esperanza y posibilidad de cambio.

En lo que respecta a Fujimori, que rompió las reglas del juego democrático con el propósito de perpetuarse en el poder y gobernar sin contrapesos, nadie sabe cuando dejará el gobierno. La Constitución ya ha sido modificada para posibilitar su reelección. Pero su permanencia en el poder no depende de eso sino, básicamente, del control que pueda mantener sobre las fuerzas armadas y de lo útil que él pueda ser a las instituciones castrenses.

Los niveles de popularidad que pueda exhibir Fujimori son importantes porque lo hacen necesario para los militares. En la medida en que pierda apoyo popular, su dependencia de los uniformados será mayor.

Por último, hay que señalar que es posible que su relativamente alta popularidad se explique por la falta de una alternativa creíble. Por ejemplo, en el período que va de mayo a setiembre de 1992, cuando la ofensiva terrorista sobre Lima sembró el pánico entre la población, las encuestas indicaban que la mayoría de los ciudadanos desaprobaba la política económica y la política antisubversiva del gobierno, es decir, reprobaban su actuación en los dos temas más importantes, a pesar de lo cual Fujimori todavía recibía la aprobación de la mayoría de los encuestados -aunque iba descendiendo-. Una explicación para este curioso fenómeno es que la población deposita sus expectativas en el presidente porque no percibe otra posibilidad de gobierno que sea mejor en este momento. Eso coincide con la baja puntuación que siguen teniendo los partidos y sus líderes.

7. Significado de las elecciones de 1992 y 1993

Al parecer Alberto Fujimori asumió rápidamente la idea -tan común en los caudillos del Perú y América Latina- que él era un Mesías destinado a transformar

radicalmente los destinos del país. Por tanto, que tenía que gobernar con poderes absolutos y por un período prolongado de tiempo, que fluctúa según algunos de sus allegados, entre los 15 años y lo que le reste de vida. Los modelos que le entusiasmaron fueron los del Asia-Corea, Taiwán, Singapur- y el Chile de Pinochet. Es decir, autoritarismo político y liberalismo económico. (Esa es una *imagen* muy común en el Perú de esos países, aunque no corresponda a la realidad, sobre todo en lo que respecta a las políticas económicas seguidas allí).

Premunido de estas ideas simples pero de “sentido común” inició el proceso denominado de “reconstrucción nacional” el 5 de abril de 1992. En su discurso el día del golpe no estaban consideradas elecciones para un nuevo congreso, sólo referendums en que la población sería llamada periódicamente para responder las preguntas planteadas por el gobierno. Pero la presión de la comunidad internacional lo obligó a cambiar el esquema y convocar a las no previstas elecciones del Congreso Constituyente, al que agregó el apelativo de *Democrático*. (CCD).

La realidad es que muy pocos en el país estaban interesados en esas elecciones. Fujimori, como se ha dicho, no las quería. A él le molesta e irrita la existencia de un parlamento, aunque lo tenga absolutamente controlado.

A los partidos de oposición democrática no les convenía una elección en esas circunstancias, porque sabían que iban a ser derrotados. No sólo porque los comicios no contaban con garantías de imparcialidad, debido a la manipulación del gobierno de facto y porque se podía prever que el Congreso carecería de autonomía y poder real, sino porque su descrédito es muy profundo entre la población.

A la mayoría de la población no le interesaba mucho la elección de un nuevo Congreso, tanto porque el anterior Parlamento estaba desprestigiado como porque intuían que eso no cambiaría mucho las relaciones de poder existentes ni, por tanto, las políticas que estaba aplicando el gobierno.

Este desinterés y apatía se reflejó en los índices de abstencionismo y de votos nulos y blancos, los más altos en los últimos 30 años (la votación en el Perú es obligatoria). Así como en el hecho insólito que ninguno de los grupos políticos realizó una gran manifestación en Lima para finalizar su campaña, como ha ocurrido desde hace muchas décadas en el Perú.

Las elecciones dividieron a los partidos de oposición entre los “abstencionistas” y los “participacionistas”. Las coordinaciones que hasta ese momento realizaban se interrumpieron. Internamente también la opción de intervenir o boicotear el CCD azuzó las discrepancias en los partidos.

El resultado le dio una mayoría al gobierno, pero no en la proporción que al parecer esperaban Fujimori y sus allegados. La lista oficialista obtuvo 37.5% de los votos emitidos y el 49.3% de los votos válidos (descontando nulos y blancos), lo que le permitió obtener 44 de las 80 curules en juego. En términos del total de electores, obtuvo el 27.1%. Este último ejercicio tiene utilidad, porque Fujimori hace sustentar parte de su legitimidad en las encuestas que le darían entre el 60% y el 70% de respaldo. Se supone, sin embargo que las encuestas reflejan las opiniones del total de la población, no sólo de los votantes. La diferencia entre 27% y 60% o 70% es entonces, apreciable.

Pero un elemento distintivo de la situación política en el Perú es que en las elecciones municipales, realizadas dos meses después, el panorama cambió radicalmente. Ninguno de los partidos que ganaron el 22 de noviembre de 1992 tuvo resultados favorables el 29 de enero de 1993. El partido oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría ganó alrededor del 2.8% de circunscripciones en el país⁶. En Lima, Fujimori retiró a su candidato cuando las encuestas indicaban que perdería largamente. Los otros partidos nuevos que aparecieron para las elecciones del CCD en 1992 (casi todos listas electorales más que partidos) no figuraron. Ninguno de ellos, incluyendo a Cambio 90-Nueva Mayoría, tienen una estructura nacional que le permitiera presentar candidatos en las 1,800 circunscripciones electorales. Ni siquiera en las 180 capitales provinciales o 25 departamentales.

A los llamados "partidos tradicionales", que cifraban sus expectativas en esta elección en razón que ellos si cuentan con una estructura, no les fue tan bien como esperaban. Si bien ganaron, en conjunto, entre el 40% y el 50% de los municipios, sus expectativas eran mucho mayores. Y en Lima fue reelecto un independiente, cuya gestión no fue precisamente eficaz, con casi el 50% de los votos, dejando atrás a los partidos políticos.

La conclusión de este panorama es que la volatilidad e inestabilidad es muy alta. Por eso ahora se dice en el Perú que en materia electoral "cualquier cosa puede pasar". Como anota Luis Pásara "la nueva etapa expresa una ruptura importante de la sociedad peruana: aquella que divide a la élite de la base social. Porque el rechazo a los políticos forma parte de un repudio popular a los sectores tradicionalmente dirigentes del país (...) la opción electoral se ha vuelto errática e impredecible y tiende a degradar aún más el nivel de sus posibles beneficiarios." (1993:39)

6 (Apoyo 1993a). No hay resultados de la votación nacional porque el Jurado Nacional de Elecciones, el único que podría tenerlos, no los ha entregado. Los datos que se consignan son entonces sólo aproximaciones en base a distritos electorales, no a votación

Finalmente, lo más importante es que el Congreso nacido de esas elecciones no ha servido para restablecer el equilibrio de poderes en el Perú. Es un remedo de Parlamento totalmente subordinado al presidente y a las fuerzas armadas, como se ha demostrado en diversas ocasiones, incluyendo la reciente frustrada investigación sobre el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de una universidad limeña a manos de efectivos del Ejército, en que el CCD además de aprobar un dictamen exculpatorio de los militares, se declaró incompetente para investigarlos mientras dure la guerra.

El 31 de octubre de 1993 se realizó un referéndum convocado para aprobar la Constitución del CCD. Alberto Fujimori lo convirtió explícitamente en un plebiscito sobre su gestión, calculando que de esa manera lograría una abrumadora votación a su favor, con lo cual pavimentaría el camino a su reelección. En esa perspectiva, Fujimori organizó la campaña centrándose en los logros de su gobierno y no tanto en el contenido mismo de la Constitución.

El primer mérito que le reconocía la población al gobierno, era la drástica disminución de la violencia terrorista después de la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992. Ese fue entonces el tema central de la campaña gubernamental, que incluyó la exhibición, durante los seis meses previos a la votación, de un promedio semanal de 40 presuntos subversivos vestidos con traje a rayas. La culminación consistió en la presentación hecha personalmente por Fujimori, de dos cartas de Abimael Guzmán -que fue filmado leyéndolas- pidiendo negociaciones de paz y, prácticamente, respaldando al gobierno. Las cartas se presentaron a partir del 1 de octubre y para los estrategas del Servicio de Inteligencia Nacional, que son los que diseñan y ejecutan las campañas de Fujimori, deberían constituir el *rush* final que le daría una victoria abrumadora. Pero en realidad este intento los perjudicó muchísimo. Desde mediados de setiembre, Sendero Luminoso inició una escalada terrorista en Lima y el país que se prolongó hasta el mismo día del plebiscito, el 31 de octubre. Fue la más importante ofensiva desde la captura de Guzmán e incluyó actos espectaculares, como coches bomba en el centro de la capital. La discordancia entre la supuesta rendición de Guzmán y los hechos que vivía la población, pusieron en entredicho la credibilidad de Fujimori, pues se evidenció que SL no sólo no había sido liquidado, sino que estaba en proceso de recomposición. Además, el trato que se le dio a Abimael Guzmán irritó a muchas personas. En sus presentaciones filmadas se le presentó con un uniforme verde oliva -ya no con traje a rayas-, bebiendo coca cola y en compañía de su conviviente, Elena Iparraguirre, de quien se suponía estaba aislado. Fujimori relató en la TV que le había enviado una torta de regalo, y se refería a Guzmán como el indiscutible jefe político de SL, cuando la

propaganda oficial anterior le negaba sistemáticamente la categoría de político, tildándolo de delincuente y criminal.

El segundo elemento de la campaña de Fujimori fueron los “regalos” que él, personalmente, efectuaba a los pobres del país. Recorrió el territorio inaugurando escuelas, repartiendo computadoras y tractores.

La oposición coincidió en hacer campaña por el *NO* a la Constitución, aunque no logró formar un sólo frente en ese propósito. No obstante que carecieron de publicidad en los medios de comunicación, desarrollaron una campaña bastante eficaz, sobre todo en las provincias, descontentas porque los aún débiles avances descentralizadores que se habían obtenido en la última década fueron liquidados con el golpe del 5 de abril, y quedaban postergados en la nueva Constitución.

Pero, quizás lo más importante, es que transcurridos 3 años desde el inicio del programa de ajuste, la población va mostrando una creciente impaciencia, dado que, si bien la inflación sigue bajo control, los niveles de empleo y de ingresos para la gran mayoría siguen deprimidos. Es decir, si hace dos o tres años las preocupaciones principales eran la inflación y el terrorismo, ahora ya no lo son, y han sido reemplazadas por el empleo y los ingresos. Y el gobierno se muestra incapaz de responder a estas nuevas demandas.

Como dice Julio Cotler, “el estilo neopatrimonial de Fujimori es el talón de Aquiles del gobierno. Su extremo voluntarismo y rechazo a las mediaciones institucionales impiden atender los intereses y demandas sociales que pueden desembocar en situaciones conflictivas.” (1993:29)

Estas serían las explicaciones básicas de los magros resultados que obtuvo el gobierno en el plebiscito, donde triunfó el *SI* por 52% contra el 48% del *NO*, cuando Fujimori había reiterado poco antes que esperaba ganar por 70% contra 30%. La diferencia esperada de 40 puntos se redujo a una de 4. (Si se toma en cuenta el porcentaje sobre el total de electores, el resultado es 33% por el *SI*, 31% por el *NO*, 6% de nulos y blancos, y 30% de ausentes).

Adicionalmente, cabe señalar que las condiciones en que se planteó el plebiscito eran las mejores para el gobierno. Se votaba por la Constitución del CCD o nada, con lo cual el gobierno jugó con la idea que no aprobarla significaba el vacío y el caos. La tendencia que registraron las encuestas en las últimas semanas previas a la votación, mostraron un sostenido crecimiento del *NO* y caída del *SI*.

Por último, hay que señalar que, a diferencia de los procesos electorales realizados hasta 1990, este fue ensombrecido por acusaciones de irregularidades, incluyendo la denuncia de fraude realizada por un miembro del Jurado Nacional de Elecciones en su dictamen, que concluía proponiendo la nulidad de las elecciones⁷.

Los procesos electorales realizados desde el golpe del 5 de abril revelan varias cosas. En primer lugar, la popularidad de Fujimori no es tan alta como la que él pretende, pero sigue siendo relativamente mayor a la de sus opositores. En segundo lugar, la carencia de un partido político se ha revelado como un límite fundamental para la institucionalización del proyecto autoritario de Fujimori y los militares. En tercer lugar, el desinterés y la apatía de la población por los asuntos políticos es creciente, reflejado en las altas tasas de ausentismo en las elecciones. Fujimori no es un caudillo que suscite el entusiasmo de las masas y los partidos políticos no logran recuperar su adhesión.

8. Relaciones civiles militares⁸

Los militares desarrollaron un creciente desafecho a la democracia representativa y sus instituciones básicamente por el abandono que se creían objeto en la lucha antisubversiva. Este sería el motivo fundamental que los llevó a participar en el golpe del 5 de abril.

Alberto Fujimori, que llegó al poder inesperadamente en 1990, carente de propuesta alguna para enfrentar uno de los problemas más acuciantes al que tenía que dar respuesta desde el gobierno, la subversión armada, buscó asesoría en medios castrenses, sobre todo en los servicios de inteligencia. Así, el nuevo Presidente fue absorbiendo el pensamiento militar en lo que a guerra antisubversiva se refiere. De esa manera, Fujimori se transformó en un vocero de las tesis que las FF.AA. habían venido propugnando desde años atrás, sin ser escuchadas -en muchos aspectos- por el poder civil, con lo cual obtuvo el respaldo, de las instituciones castrenses. Así, los militares lograron el "apoyo político" que venían reclamando, es decir, que el poder civil respalde sus medidas y les otorgue libertad de acción para luchar contra la subversión.

7 "Voto singular del Dr. Juan Chávez Molina", Diario *El Peruano*, p. 119430 a 119441, 11.12.93.

8 Este tema ha sido desarrollado en una investigación en el IEP (Rospigliosi 1993a).

El desafecto de los militares hacia la democracia se fue incubando a lo largo de toda la década de 1980. Corresponde a la élite política peruana la responsabilidad principal, porque ella debió responder al desafío de la subversión armada, procesar seriamente las demandas castrenses (lo que no significaba necesariamente aceptarlas) y preocuparse por formar expertos civiles en asuntos militares. Pero no hizo nada de esto.

Los sucesivos gobiernos prácticamente se desentendieron del problema de la guerra, el más álgido para las instituciones castrenses, entregándose a los militares, pero sin llenar los requisitos que éstos pedían para cumplir con su misión y sin proponer una concepción global distinta a la propugnada por las Fuerzas Armadas.

En el curso de la guerra, se acumularon muchas tensiones, debido tanto a la inacción de los gobiernos democráticos como por la posición asumida ante la subversión por una parte de la representación parlamentaria y de la prensa, que canalizaban las críticas a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. La postura ante la subversión de esos sectores políticos era ambigua, lo que para el pensamiento militar lindaba con la traición.

Para los militares la subversión armada emprendida por Sendero Luminoso encajaba claramente en el esquema de un típico movimiento comunista que trata de destruir el Estado, la sociedad y, por supuesto, las FF.AA., para implantar un orden radicalmente distinto. Desde varias décadas atrás las instituciones castrenses estaban prevenidas contra este tipo de amenaza y tenían ideas muy sólidas respecto a la necesidad de enfrentar este fenómeno de manera contundente.

La brecha de desconfianza e incompreensión no fue cerrada. Ni desde el ámbito castrense ni desde las sociedades política y civil se hizo intentos serios ya no para acercarse al otro, sino siquiera para entender el pensamiento del otro. Los prejuicios y las ideas preconcebidas predominaron a lo largo de más de una década hasta desembocar en el golpe del 5 de abril.

Producto de estos desencuentros y de otros roces con el Partido Aprista, que exacerbaban las susceptibilidades castrenses, sectores de la alta oficialidad de las FF.AA. empezaron a preparar el derrocamiento de Alan García y la instauración de un gobierno militar. Entre 1988 y 1989 parece que se empezó a gestar el golpe, originalmente planeado contra García. La ideas rectoras de ese movimiento castrense están contenidas en un documento que se puede denominar el Plan del Golpe, que consta de tres tomos y fue preparado por militares y civiles, aunque no

todos los implicados sabían exactamente de que se trataba. Estuvo listo en octubre de 1989, y sufrió posteriores actualizaciones⁹.

El Plan del Golpe se gesta básicamente a partir de una estimación de los militares acerca de la presunta crisis de gobernabilidad que vive el país, generada por la violencia subversiva y por los errores de Alan García y el Apra. La concepción de las FF.AA. como salvadoras y la necesidad de un régimen autoritario son similares a las que guiaron a los militares de las décadas de 1960 y 1970. Lo que cambia son las orientaciones económicas, donde el socialismo, estatismo y antiimperialismo son reemplazados por el liberalismo, privatismo, aperturismo e incentivos para la inversión extranjera. Es claro también que en este caso los militares que preparaban el golpe, establecieron relaciones con sectores empresariales -que probablemente proporcionaron las ideas económicas-, con los que coincidían, tanto en la necesidad de un programa económico liberal, como en la implantación de un gobierno autoritario que impusiera orden.

Los conspiradores no pudieron derrocar a Alan García. Al parecer, uno de los factores que impidió el golpe fue la confianza de algunos sectores militares y empresariales en el triunfo de Mario Vargas Llosa, al que eran afines. Otro factor fue que García y sus servicios de información pudieron detectar algunos movimientos y tomaron ciertas disposiciones que dificultaron la acción golpista. Por último, pero no menos importante está la presión de la Embajada norteamericana que no ocultaba su oposición a cualquier aventura militar. Pero ¿qué ocurrió con los golpistas luego del inesperado resultado de las elecciones de 1990?

9 El Tomo I, "Impulsar al Perú al Siglo XXI", consta de 8 capítulos y 4 anexos, incluyendo desde un análisis de la "evolución y características del Estado peruano en su etapa republicana", hasta "políticas sectoriales de corto y mediano plazo dentro de una proyección estratégica al siglo XXI". La Introducción está fechada en octubre de 1989. El Tomo II es la "Apreciación de Inteligencia", que consta de 4 capítulos y 17 anexos. La primera evaluación está hecha "al 20 de febrero de 1990". Es un análisis de la situación política centrado en los factores favorables y desfavorables para el golpe, y la definición de los escenarios posibles. Los 17 anexos incluyen asuntos operativos, como locales que deben capturar las fuerzas del orden el día del golpe, la relación de personas "a ser neutralizadas", listas de políticos y dirigentes sindicales, etc. Al final tiene dos anexos más a la apreciación de inteligencia de fechas 9 de abril de 1990 (un día después de la primera vuelta electoral) y 13 de junio de 1990 (tres días después de la segunda vuelta) y por último una "Hoja de coordinación final" que fija como "Día D" el 27 de julio de 1990, un día antes de la asunción del mando por Alberto Fujimori. El Tomo III se titula "El Consejo Estratégico de Estado" e incluye los órganos de gobierno y aclaraciones sobre el plan en forma de preguntas y respuestas.

Luego que Fujimori ganó la segunda vuelta y era presidente electo, los golpistas, al percatarse de la debilidad del triunfador -sin partido, ni equipo, ni programa-, trataron de coparlo y usarlo como fachada de un gobierno de las FF.AA. Sin embargo, parece que el proceso fue más complejo. Un sector militar se adelantó y rápidamente lo rodeó, llevándose a una instalación castrense, bajo la batuta del ex capitán del ejército, Vladimiro Montesinos¹⁰, que tenía vinculaciones con el Servicio de Inteligencia Nacional desde años atrás y se había relacionado con Fujimori en su condición de abogado con buenos contactos en el Poder Judicial y con fama de “arreglarlo todo” por cualquier medio, para solucionarle un problema de la sub valuación de propiedades y evasión de impuestos, durante la campaña electoral.

Montesinos, al parecer, no había participado en la elaboración del Plan golpista. Fueron algunos altos oficiales los que, al saber de la cercanía e influencia que Montesinos había adquirido sobre Fujimori, entregaron el Plan al ex capitán. No es claro si Montesinos se lo hizo conocer de inmediato a Fujimori o no, pero si parece que finalmente se produjo un entendimiento entre Fujimori, Montesinos y algunos de los militares que participaron en la elaboración del Plan golpista antes del 28 de julio de 1990, fecha en que Fujimori asumió la presidencia.

La ventaja de este nuevo esquema -para los golpistas- era que eso evitaba los conflictos internos y externos derivados de establecer un gobierno institucional de las FF.AA. La desventaja era que no les permitía llevar adelante con comodidad todas sus propuestas.

La idea habría sido establecer un régimen que aplicara, básicamente, los lineamientos contenidos en el Plan, pero manteniendo a Fujimori en la presidencia y una apariencia de gobierno democrático y civil, una “**democracia dirigida**” en términos de los golpistas. El análisis de los militares se basaba en varias consideraciones: el rechazo a los partidos políticos en las elecciones y el fracaso “del modelo de representación política vigente en el país”; el vacío de liderazgo que produjo la derrota de Vargas Llosa; la evaluación que “los grupos de poder económico buscarán inexorablemente el concurso de las FF.AA. ante la configuración de su derrota y el fin de sus expectativas de copar el poder político”; la continuación del proceso de descomposición social; la fragmentación del parlamento con la consiguiente complicación de la conducción del país. (“Apreciación de Inteligencia”, 1990: 90 y ss.)

10 Montesinos fue expulsado del Ejército en 1976 y sentenciado a prisión por un tribunal militar. Cuando salió de la cárcel, se graduó de abogado y durante muchos años defendió a acusados de narcotráfico. (Ver Rospigliosi 1993b).

Ante lo cual -dice el Plan- se presenta una situación que permite “a las FF.AA. negociar la conducción política del Estado en una solución cívico-militar dentro del concepto de **Democracia Dirigida** que se ha elaborado para hacer frente a las necesidades de la Patria.” Esto implicaba una negociación con Fujimori que llevaría a un “receso transitorio” del atomizado Congreso, garantía de estabilidad a los agentes económicos, y “política de pacificación coherente, planeada y dirigida por las FF.AA.” (“Apreciación de Inteligencia”, 1990: 104). Los tres últimos puntos se cumplieron, aunque no apenas instalado el nuevo gobierno sino a partir del 5 de abril de 1992.

Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos fue mucho más complejo de lo que imaginaron los militares que elaboraron el Plan y pensaron que podían copar el gobierno. Al parecer el principal factor que modificó estos planes fue la presencia de Vladimiro Montesinos en el SIN. Montesinos habría aceptado en principio el plan, pero con variantes que le daban un lugar preeminente a él y al SIN, disminuyendo el peso específico de los comandos castrenses y de las FF.AA. como institución.

Se produjo, entonces, una complicada trama de alianzas, intrigas y enfrentamientos, que dividieron no sólo a los militares que estaban a favor del golpe con los que no estaban por esa alternativa, sino también pugnas entre aquellos que prepararon el Plan. Entre éstos, algunos se vincularon a Montesinos y otros se mantuvieron alejados de éste y el SIN. Básicamente, la otra gran división parece haber sido la de *institucionalistas* que rechazaban la intromisión política en las FF.AA. y los *politizados*, que estaban con Montesinos y Fujimori. Las líneas divisorias no eran muy firmes y se entrecruzaban, pero el esquema puede ser útil para tratar de guiarse en la confusa y conflictiva situación que se produce en las FF.AA. a partir del 28 de julio de 1990. Entre los *institucionalistas* había algunos que estaban a favor del golpe y otros no.

El Plan del Golpe se llevó adelante parcialmente. O, mejor dicho, el Plan fue usado como base para formular un esquema de gobierno autoritario que incluyera a las FF.AA. como pilar básico.

En suma, desde el inicio existió una decisiva presencia militar en el gobierno de Fujimori, en particular del Ejército. Pero no fueron las FF.AA. -y el Ejército- como **institución**, tal como habían supuesto los autores del Plan del Golpe, sino básicamente elementos afincados en el Servicio de Inteligencia Nacional, que usaron a -y se aliaron con- miembros de la cúpula militar para ir controlando progresivamente las instituciones castrenses. Fujimori participó desde el principio en este esquema.

Como queda claro después de leer el Plan del Golpe, se había producido un cambio radical en los militares respecto a algunos temas predominantes en las cúpulas castrenses en la década de 1970. A diferencia de las propuestas estatizantes, antiimperialistas y socializantes de aquella época, ahora sostienen con entusiasmo las doctrinas de la economía liberal, de las privatizaciones y el predominio del mercado. Ese cambio ha llevado a algunos a sostener que se está viviendo en el Perú una ruptura completa con la etapa del general Juan Velasco (1968-1975). En realidad, el sustrato autoritario de ciertos militares y su convicción que son ellos los únicos que pueden ordenar y conducir el país, es la misma. Han cambiado las modas estatizantes predominantes en el Perú y América Latina en los 70, por la moda del libre mercado, dominante en los 90. Pero en esencia, el modelo autoritario es el mismo, adaptado ciertamente a las condiciones internacionales de fines del siglo XX, que hacen muy difícil la instauración de un gobierno institucional de las FF.AA.

Algunas de las consecuencias de esta nueva intervención castrense han sido: la instauración de un gobierno autoritario cívico-militar, sustentado por las FF.AA. y apoyado por los empresarios; un creciente proceso de desinstitucionalización de las FF.AA., debido a la manipulación de mandos y ascensos efectuado para mantener el control sobre la cúpula militar; el aumento del poder del Servicio de Inteligencia Nacional sobre las FF.AA.; el surgimiento de facciones en las FF.AA.

9. Conclusiones

Muchas personas pensaban en el Perú, a principios de los 90, que la democracia no podía ser derrocada otra vez. La ilusión que los años transcurridos desde la última dictadura militar eran un signo de fortaleza, así como la desmedida confianza en el ambiente internacional favorable, llevaron a creer que la democracia en el Perú se estaba consolidando. En realidad se avanzó poco -o se retrocedió- en la construcción de instituciones democráticas, que constituyen la base sólida para fortalecer el régimen.

El gobierno surgido del golpe del 5 de abril de 1992 es producto de una alianza entre el presidente Alberto Fujimori y parte de la cúpula militar. Pero a diferencia del gobierno de las FF.AA. 1968-1980, esta vez no hay una participación institucional de las FF.AA. Existe una intervención decisiva del Servicio de Inteligencia, convertido en instrumento de control sobre las FF.AA. y a la vez en partido político de Fujimori.

El gobierno autoritario no es tan fuerte como parece. La existencia de facciones en las FF.AA. es un peligro constante a su estabilidad. Allí se pueden

gestar desde movimientos institucionalistas que busquen regresar a la democracia -como el que intentó el general Jaime Salinas en noviembre de 1992-, hasta otros vinculados al narcotráfico, que al parecer está penetrando crecientemente las FF.AA.

La falta de una organización política es otra de las debilidades fundamentales del régimen de Fujimori, que difícilmente puede ser suplida indefinidamente por una relación política populista entre el gobernante y la población, sustentada en la manipulación de los medios de comunicación por el Servicio de Inteligencia. Sobre todo, si se pretende jugar con reglas que aparenten ser las de una democracia, incluyendo elecciones.

Sin embargo, la oposición democrática al gobierno autoritario, tampoco es fuerte. Los partidos políticos no han podido reconstruir sus vínculos con los ciudadanos, prácticamente todos atraviesan por crisis y enfrentamientos internos, y no han sido capaces de constituir un frente común. En estas circunstancias, las posibilidades de un retorno a la democracia existen, pero son débiles.

Si bien el ambiente internacional es favorable, el compromiso con la democracia de parte de los países industrializados así como de muchos gobiernos latinoamericanos es limitado. Finalmente, lo que muestra la experiencia del Perú, es que la comunidad internacional termina aceptando los hechos consumados siempre y cuando el gobierno pueda conservar el orden y la estabilidad, y cumplir con sus compromisos con el exterior. Si es así, no importa demasiado que no sea un régimen democrático, basta que mantenga una apariencia democrática.

La solución de los problemas de gobernabilidad depende, por supuesto, de las condiciones internas de cada país, pero los ejemplos de fuera, sobre todo de países cercanos y similares, es importante. En el caso del Perú, por ejemplo, el régimen de Pinochet suscitó muchas simpatías en medios castrenses, empresariales y en parte de la población. Hoy día, el gobierno de Fujimori es observado con atención en América Latina y los países industrializados. ¿Podrá convertirse en un nuevo modelo para imponer el orden en países subdesarrollados afectados por crisis de gobernabilidad? Dependerá de su éxito o fracaso en un plazo mediano. Por lo pronto, ya es mirado como una posibilidad atractiva en varios lugares de Latinoamérica.

En los países andinos, no se ha avanzado sustantivamente en la construcción de instituciones democráticas, y en varios de ellos se han producido crisis que han hecho crujir su andamiaje político. Una pieza fundamental en el sostenimiento de

la democracia, los partidos políticos, han seguido un proceso de debilitamiento y han ido perdiendo vínculos con los ciudadanos -excepto en Bolivia-, acentuando los problemas de gobernabilidad. Si la clase política de los países andinos no corrige sus errores, el mal ejemplo de la “fujimorización” podría extenderse.